

RUMANIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

En estos meses, el debate político ha girado esencialmente alrededor de dos temas: la revisión de la ley electoral y la reforma del sistema de pensiones.

Por cuanto concierne a la ley electoral, la introducción del voto uninominal parece destinada a quedar bloqueada por mucho tiempo, después de una sesión de la comisión sobre la ley electoral suspendida tras más de dos horas de discusión. Los representantes del PSD han intentado corregir la decisión anterior, que introducía el principio del sistema uninominal mixto, a través de una compensación. Algunos diputados han contestado la introducción de este principio en ambas Cámaras, pidiendo que la norma se aplique sólo para la elección de los diputados. PD y PNL han propuesto la eliminación de las listas de partido y la atribución de las compensación a los candidatos para el uninominal que se clasifiquen en el segundo y tercer puesto. La sesión fue suspendida cuando los socialdemócratas pidieron que se renunciara al sistema mixto utilizando sólo el mayoritario puro.

En resumidas cuentas, el debate sobre reforma electoral sigue en alta mar.

En cuanto a la cuestión de las pensiones, de la que se dará cuenta más detalladamente en el apartado correspondiente, el problema principal ocasionado por la nueva ley, propuesta por el PSD y aprobada por unanimidad a primeros de julio, consiste en la localización de fondos para la cobertura financiera de los fuertes aumentos previstos para las prestaciones a partir del próximo año.

Según el Gobierno, dichos fondos existen (v. apartado siguiente). Tariceanu afirma que el aumento de las pensiones será real y no dañará a la estabilidad macroeconómica, así como niega que se trate de una iniciativa electoral. «Afirmar que el querer dar a los pensionistas un nivel de vida decente es una medida "de izquierdas" me parece estúpido», ha declarado el primer ministro, recordando que un partido liberal en un país europeo moderno no gobierna sólo para los empresarios, sino para todas las categorías sociales.

Pero el asunto no ha dejado de caldear el clima siempre polémico entre el primer ministro y el presidente de la República, Basescu, al fin promulgó la ley, pero no sin antes haber declarado que la promulgaría sólo si el Gobierno presenta las fuentes financieras que cubren el aumento. El presidente había precisado que no se puede promulgar una «ley embustera» y que está dispuesto a reenviarla al Parlamento para un nuevo debate.

Basescu ha acusado al Gobierno de cobardía, pero también lo ha invitado a colaborar para que se encuentren soluciones que impidan que la aplicación de la ley cause desequilibrios económicos.

Situación económica y social

Rumanía recibirá de la Unión Europea 2.550 millones de euros para el cumplimiento del Programa Operativo Sectorial. El crecimiento de la competitividad económica cubrirá, a partir de los fondos de presupuesto, la diferencia hasta los 3.000 millones de euros. Los primeros proyectos partirán en septiembre.

Un comunicado del Ministerio de Economía y Hacienda indica que «el objetivo general del POS CCE es el crecimiento de la productividad de las empresas rumanas en vista de la reducción de las diferencias con la productividad media de la UE. Esencialmente, la intención es que las medidas emprendidas puedan generar, en 2015, un crecimiento medio de la productividad del 5,5% anual, que permita a Rumanía llegar al nivel de la media UE».

Por su parte, las Pymes se beneficiarán, este año, de unos 100 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDR), mediante un programa puesto en marcha por el Gobierno y el Fondo Europeo de Inversiones, mediante un acuerdo, denominado "Jeremie", aprobado por decreto del Gobierno.

Mediante el programa se financiarán cantidades procedentes del FEDR para la mejora del acceso a la financiación de las Pymes.

Rumanía ha registrado en el primer trimestre del año un aumento del 25% del coste de la mano de obra, respecto del mismo periodo del año anterior, situándose sólo por detrás de Letonia, donde aumentó el 32,6%. El mayor aumento de los sueldos se registrará en las regiones del norte-oeste con un 38,1%, y el menor en las regiones occidentales con un 31,8%.

Por otra parte, el PIB per capita aumentará el 45% en la mayoría de las regiones en desarrollo, con la única excepción de las regiones del norte-oeste donde se registrará un pico de 12,2%.

Por cuanto atañe al tema candente de la cobertura económica del aumento de las pensiones previsto por la nueva ley, el ministro de Hacienda, Varujan Vosganian, ha declarado que los recursos (más de dos mil millones de euros) serán garantizados por el crecimiento económico, el aumento de los salarios, el mayor número de asalariados, la mejora de la recaudación fiscal y algunas transferencias de conceptos presupuestarios hacia los seguros sociales.

Según Vosganian, el aumento de las pensiones supone, sólo para el próximo año, un esfuerzo financiero de más de 2.000 millones de euros. El crecimiento nominal del PIB, estimado el año pasado en un 10%, constituirá la mayor aportación, entre 1.100 y 1.200 millones de euros; otros 500 millones podrán llegar del aumento del empleo, previsto en un 2% y del crecimiento de los salarios; las modificaciones aplicadas en el sector fiscal, con las que el Gobierno ha aumentado la base impositiva de los salarios, aportarán otros 300 o 400 millones; por último, la transferencia de otros conceptos presupuestarios podrá aportar otros 400 o 500 millones a los seguros sociales. Por otra parte, la mejora de la recaudación fiscal generará un aumento de los ingresos equivalente al 1% del PIB (más de 1.000 millones de euros).

Vosganian afirma que el aumento de las pensiones no dañará la estabilidad macroeconómica, recordando que el superávit de dinero que se destinará al consumo será marginal respecto al producido por el crecimiento de las rentas de otras categorías sociales, de los aumentos salariales o de las remesas de los emigrantes.

Sin embargo, según Raluca Turcan, del Partido Liberal Democrático (PDL), la respuesta del Gobierno sobre cobertura de la ley es «provocadora y demagógica.(...) El Gobierno debería haber presentado una estimación de los ingresos y de los gastos para los años siguientes y no una serie de palabras vacías». Turcan cree que el Gobierno utiliza el tema del aumento de las pensiones como instrumento político contra los rumanos y el presidente de Rumanía.